

# Venezuela y el capitalismo del Siglo XXI: cambios visibles

Benedict Bull

Présidente du conseil de direction du NILAS

La llamada "Revolución Bolivariana" de Venezuela, se ha promovido desde hace 15 años como un ejemplo de Socialismo del Siglo XXI. Al gobierno de Nicolás Maduro todavía se le denomina "socialista", a pesar de que, en la actualidad, Venezuela se encuentra en medio de un proceso de transición a un capitalismo autoritario, descentralizado y violento. Proceso económico que no resolverá los grandes problemas del país, pero que si nos debiera hacer cambiar los términos de los debates que tenemos sobre Venezuela.

Las fotos de los supermercados con los estantes vacíos y los titulares sobre la escasez de papel higiénico o comida caracterizaron las noticias sobre Venezuela durante mucho tiempo, imágenes a las que se contraponían explicaciones sobre sus reservas de petróleo -que son las mayores del mundo conocidas- o recuerdos nostálgicos que en algún momento fue el país más rico de América Latina. La situación de crisis se explicaba por una "política socialista" que incluía controles de precios y divisas, control estatal de las empresas y aumento del gasto público. Esto último generó un fuerte desequilibrio fiscal, pues los gastos excedieron los enormes ingresos petroleros y se fue cubriendo el déficit con préstamos. Cuando ya no hubo fondos propios ni créditos para cubrir los costos el Estado, se empezó a imprimir dinero. El resultado de esas políticas fue el colapso de la producción e hiperinflación y, finalmente, una explosión de la pobreza y una crisis humanitaria que ha llevado a 4,5 millones de venezolanos a abandonar el país.

En la actualidad, los estantes de los supermercados se ven muy diferentes. En las zonas más ricas del este de Caracas, la llamada "economía de Nutella" está en auge. Los bodegones (locales de venta de alimentos) están llenos de productos importados del mundo entero, cuya mayoría proviene directamente de los Estados Unidos (EE.UU.). Los valores que marcan las etiquetas reflejan que la política de control de precios es una falacia; pero las fuerzas del mercado comienzan a ajustar las asombrosas sumas de dinero que inicialmente se tenía que pagar por barras de chocolate Hershey o vino chileno, a valores más cercanos a sus precios reales. Nuevos y relucientes edificios de oficinas se construyen con más rapidez que los hospitales que China edificó para atender la crisis del coronavirus, a pesar de que no hay inquilinos visibles o negocios dentro. Los restaurantes con precios de Manhattan y los Ferraris flameantes en los estacionamientos aparecen también con la misma velocidad.

Los supermercados ordinarios y los mercados informales en los barrios más pobres se llenan de productos provenientes de, entre otros países, Colombia, Brasil, México y Turquía. Algunos tienen aún precios en moneda local, aunque todo se pueda pagar en dólares. Como cotizar los precios en moneda norteamericana sigue siendo ilegal, a menudo se pone un # en lugar de \$ encima del precio de las latas de atún o carne con el fin de disimularlo.

En la zona rural la situación es bastante diferente. En los mercados informales, las personas venden lo que les sobró de los paquetes de ayuda alimentaria del gobierno (CLAP): ya sea un poco de aceite de oliva de Siria o pasta de Turquía. En las áreas cercanas a la frontera colombiana, los bienes "de contrabando" llenan los estantes de las tiendas; se debe matizar aquello de "contrabando" porque el comercio es tan rutinario que apenas se considera ilegal, a pesar de no pasar por controles formales.

En el sistema de atención médica todavía se está luchando con la escasez de electricidad, agua y medicamentos. Pero, aunque el sistema de salud pública esté casi colapsando, a diferencia de hace dos

años, ahora se encuentran fácilmente medicamentos regulares en las farmacias. La mortalidad infantil se ha disparado, mientras se construyen nuevos hospitales privados que servirán para atención de las élites.

Los cambios se explican porque el gobierno de Nicolás Maduro está llevando a cabo una terapia de choque, que ni la mayoría de los más radicales economistas neoliberales del FMI se hubiera atrevido a poner en marcha. Las reformas comenzaron en agosto de 2018 cuando la unidad monetaria nacional, el bolívar, fue reemplazada por el “bolívar soberano”, operación que consistió en eliminar seis ceros al precio del dinero y cuando se comprometieron a recortar el gasto público para fortalecer la confianza en la nueva moneda. Para entonces, el gasto gubernamental ya se había reducido en más del 90 % desde 2017, observándose desde ese momento una tendencia de caída en picada del gasto, en gran parte beneficiada por el hecho de que el salario mínimo para los 4 millones de empleados estatales se había reducido a alrededor de \$ 6 mensuales.

El siguiente paso en el ajuste estructural fue el levantamiento de los controles de divisas y precios. El dólar que Maduro caracterizó como “instrumento del imperialismo yanqui” ahora es bien recibido y, en la actualidad, alrededor del 60% de todas las compras y ventas se hacen esa moneda. Una de las razones de la liberación del dólar fue que la hiperinflación creó escasez de billetes en moneda nacional. Hubo momentos en que los venezolanos tenían que llevar el dinero en bolsas para hacer cualquier pequeña compra en las tiendas del barrio. Al mismo tiempo, el colapso de la red eléctrica del país provocó largos apagones, que hicieron que el pago con tarjeta tampoco estuviera disponible.

En 2018, también se lanzó la criptomoneda Petro, que en la actualidad se considera ante todo como una unidad de cuenta y no un medio de pago. Contrariamente al valor del bolívar soberano que cae, la moneda virtual se mantiene estable. Esto se debe, entre otras cosas, a que, si bien el valor de los salarios pagados en bolívares soberanos continúa cayendo en picada, el Estado puede mantener estable en Petros el precio de los pocos servicios que los habitantes pagan, como los pasaportes, por ejemplo.

Pero las reformas económicas no se detuvieron ahí. En 2019, las empresas públicas comenzaron a privatizarse, incluidos hoteles y supermercados. Ahora se está evaluando la privatización parcial de la compañía petrolera PDVSA. Al mismo tiempo, se eliminaron temporalmente los aranceles para asegurar el abastecimiento de bienes de consumo; pero, los productos importados siguen estando disponibles solo para cerca de la mitad de la población que tiene acceso a dólares. La otra mitad sobrevive gracias a la ayuda alimentaria del Estado a través de las cajas CLAP, que garantizan a las personas un mínimo de carbohidratos y grasas, pero que también crean dependencia política y lealtad forzada. El otro sector de captación de ingresos para ese sector es el mercado informal, en el que realizan varias pequeñas actividades económicas.

Lo que ha motivado las reformas es la combinación del colapso económico, las sanciones y la presión de una nueva élite empresarial leal al gobierno. En agosto de 2017, EE.UU. impuso las primeras medidas con el fin de impedir al gobierno venezolano recaudar fondos por medio de préstamos en los mercados financieros regulares, sanciones que se complementaron en 2019 con la prohibición de la venta de petróleo y oro al país. A partir de agosto del año pasado, todos los bancos o empresas que comercien con el Estado venezolano pueden ser objeto de las sanciones estadounidenses. Aunque en principio las medidas no estaban dirigidas al sector empresarial o a personas naturales no relacionadas o partícipes del régimen de Maduro, los actores privados se ven perjudicados porque se les niega de facto el acceso a mercados y créditos, ya que los bancos y empresas extranjeras temen verse afectadas por las sanciones si tienen relaciones con los agentes económicos venezolanos. Temor que se agrava, si se toma en cuenta que la mayoría de las compañías locales han tenido en algún momento una relación de proveedor con el Estado venezolano y, por lo tanto, pueden estar sujetas a penalizaciones.

Las sanciones han perjudicado bastante al sector privado tradicional de Venezuela, que ya venía golpeado por la hiperinflación y los ataques políticamente motivados desde el Estado. Pero también, han

golpeado fuertemente a las nuevas empresas establecidas por grupos próximos y afines al gobierno de Maduro. Una gran parte de ese nuevo empresariado está vinculado a los militares y para algunos expertos, es esa nueva élite la que ha impulsado la liberalización de la economía. El cambio de políticas se ha visto favorecido por la cada vez mayor dependencia que tiene el gobierno de los actores privados. Las sanciones, especialmente las que afectan a la industria petrolera, su principal fuente de ingresos lo han fragilizado considerablemente. El Estado ya no tiene fondos para subsidiar al sector privado local con dólares baratos o beneficiar a grupos particulares con contratos favorables como hacía antes. En resumen, el sector privado es quien ocupa ahora el asiento del conductor de la política económica de Venezuela, pero se trata de un sector privado completamente diferente al que ha trabajado durante varios años para el cambio del régimen Chavista.

Entre los efectos de la liberación económica está el respiro que han tenido algunas partes del sector comercial: el dinero que antes se enviaba a cuentas en el extranjero o se invertía en España o EE. UU., ahora se está utilizando en mayor medida para nuevos edificios y negocios en los mejores vecindarios de Caracas. El producto interno bruto (PIB) formal se ha reducido a un tercio de lo que era hace 10 años, y continúa disminuyéndose; pero, la combinación de una política económica pésima y politizada, la inflación y las sanciones ha contribuido a que una parte cada vez más grande de la economía sea opaca, sumergida e informal y, por lo tanto, no se refleje en las cuentas nacionales, o en la valoración del PIB que hace el Banco Central.

En estos momentos, las estimaciones más confiables indican que un tercio de los ingresos monetarios de Venezuela provienen de fuentes "informales" como el contrabando de oro y las drogas. El resto proviene de la producción de petróleo y remesas de venezolanos en el extranjero. Si bien la producción de petróleo se ha reducido a un tercio de lo que era, las contribuciones de los migrantes se han multiplicado durante el mismo período.

Sin embargo, la actual liberalización informal está lejos de crear una economía regulada solo por la mano invisible del mercado. Tanto el acceso a los bienes como la distribución están controlados en gran medida por actores armados. Oficiales militares controlan grandes empresas estatales, pero también son dueños de las nuevas compañías en los sectores del comercio y servicios. El Ejército también abastece a los mercados informales con productos que provienen del contrabando o de las importaciones formales del Estado que, en un principio, debían haberse destinado a los paquetes de ayuda alimentaria. Pero también hay otros grupos armados que controlan desde el contrabando de drogas y gasolina, hasta la distribución de la ayuda alimentaria estatal CLAP. Los llamados "colectivos", a menudo armados por el gobierno, controlan los mercados en los barrios populares, especialmente en las ciudades. En las zonas fronterizas con Colombia, el ejército venezolano, junto al ELN y a desertores de las FARC, controlan el comercio legal e ilegal. La minería en el sur está en manos de guerrillas y bandas criminales de Venezuela, Brasil y Colombia. En todas partes del país, la extorsión por parte de actores armados es parte de la vida cotidiana de las empresas. El que tiene armas tiene poder, también financiero.

La experiencia de varias pequeñas empresas es que los militares primero los extorsionan, y cuando la empresa quiebra, ellos se hacen cargo de sus negocios. En los años que vienen, es de esperar una mayor competencia entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares y otros grupos armados por el control de diferentes partes de una economía en contracción, lo que a la larga puede traer consigo enfrentamientos y violencia entre ellos.

El debate que debemos tener sobre Venezuela no es si el modelo de desarrollo del chavismo es un ejemplo del fracaso inherente del socialismo, ni si el colapso es resultado de la llamada "guerra económica". *Desde el inicio del chavismo, deberíamos haber tomado como punto de partida para la discusión sobre Venezuela, la corrupción y la concentración de dinero y poder que la dependencia petrolera y el dominio militar han creado en Venezuela durante el siglo pasado. El debate debería haberse enfocado en qué tipo de instituciones y políticas de desarrollo podrían haberlo contrarrestado mejor.*

El chavismo erró tremendamente al no enfrentar la corrupción y la concentración de dinero y poder que la dependencia petrolera y el dominio militar han creado durante el siglo pasado y ha agravado la situación de forma brutal; pero una liberación capitalista descontrolada como la que se está ahora dando tampoco mejorará la situación. Aprendimos suficiente de todos los procesos de liberalización en el pasado (en América Latina y Europa Oriental) como para saber que solo pueden tener éxito en un contexto de instituciones que logren un equilibrio entre varios poderes estatales, y entre aquellos que poseen el poder político, económico y -en este caso- el violento. El camino para construir esta institucionalidad en Venezuela ahora, solo se puede hacerse a través del diálogo político.

Después del intento de diálogo facilitado por Noruega en agosto de 2019, que no llegó a buen puerto, el gobierno ha fortalecido su capacidad de control político con el apoyo de Rusia, Turquía, Siria e Irán, con la participación de China en un papel secundario. Mientras que la oposición, apoyada por los EE.UU., no ha sido capaz de enfrentar el poder político de Maduro. En lo económico, el peso de las políticas fallidas y las sanciones han provocado que el régimen haya renunciado a cualquier pretensión de transformación socialista.

Venezuela se verá gravemente afectada por la caída de los precios del petróleo ocasionado por el coronavirus y la guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Sin embargo, en los próximos meses, el gobierno puede hacerse con la Asamblea Nacional, hasta ahora controlada por la oposición. Si eso conduce a una estabilización política temporal en Venezuela, puede ser una advertencia de lo que veremos en el futuro en otras partes del mundo en conflicto: un capitalismo del siglo XXI en el que el Estado de Derecho y las instituciones se sacrifican en nombre del superávit y el poder.